



BOLETIN OFICIAL  
DE LAS CORTES GENERALES

# CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

## IV LEGISLATURA

Serie A:  
PROYECTOS DE LEY

7 de octubre de 1991

Núm. 66-1

### PROYECTO DE LEY

**121/000064 Seguridad Privada.**

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:

(121) Proyecto de ley.

121/000064.

AUTOR: Gobierno.

Proyecto de Ley de Seguridad Privada.

Acuerdo:

Encomendar su aprobación con competencia legislativa plena, conforme al artículo 148 del Reglamento, a la Comisión de Justicia e Interior.

Asimismo, publicar en el Boletín, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 25 de octubre de 1991.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de octubre de 1991.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.**

### PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD PRIVADA

#### EXPOSICION DE MOTIVOS

##### I

La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin embargo, progresivamente se ha ido extendiendo por todas las sociedades de nuestro entorno la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o agentes privados, llegando a adquirir en las últimas décadas un auge hasta ahora desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el Reino Unido o Italia hayan aprobado recientemente leyes de nueva planta o modificado su anterior legislación para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado.

En este marco se inscribe la presente Ley, en su consideración de los servicios privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los de la seguridad pública. A partir de ahí se establece un conjunto de controles e intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las

actividades de seguridad por los particulares. Lo que se busca con estas normas es articular las facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de la seguridad.

El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, a partir de la primera regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obliga a revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de empresas del sector y de los actuales Vigilantes Jurados de Seguridad, cuya existencia no puede ser cuestionada, toda vez que se trata de un medio de prevención del delito y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública. Además debe tenerse en cuenta que la presencia de Vigilantes en controles de acceso y seguridad interior, no suele tener una trascendencia externa que perjudique el quehacer de los Cuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos colaboradores en tareas que difícilmente podrían cubrir por sí solos.

El análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su crecimiento han aparecido numerosos problemas tales como el intrusismo, la falta de normas de homologación de productos, deficiente formación de los Vigilantes, irregularidades en su funcionamiento, y comisión de numerosas infracciones, así como la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales.

La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la Constitución; y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental, incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad, conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de oficio.

La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y garantizar su seguridad.

Ante un panorama como el descrito se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador que, estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese hacer una diagnosis de su situación, a partir de la cual se buscasen las soluciones adecuadas para ordenar un sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder a nuevas áreas de actividad dentro de la seguridad.

## II

La normativa vigente, integrada principalmente por disposiciones sobre Empresas Privadas y Vigilantes de Seguridad, es de inspiración preconstitucional, aunque algunas de sus formulaciones actuales obedezcan a reelaboraciones promulgadas con posterioridad a la publicación de la Constitución Española de 1978.

Una de las críticas más abiertamente expresadas, y generalmente coincidentes, se refiere no tanto a la deficiencia de las normas como a su enorme dispersión y a su falta de estructura unitaria y sistemática, lo que produce, claro está, lagunas o desfases propios de una legislación que envejece y que ha sido superada por la rápida evolución del sector.

Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas, o no prohibidas estrictamente pero carentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico con rango legal necesario es urgente.

## III

Aparte de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad privada, se considera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la Ley primero, y posteriormente por medio del correspondiente Reglamento, las previsiones demandadas por la evolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.

1. El depósito y almacenamiento de fondos por las Empresas de Seguridad, no previsto en las normas vigentes, ha surgido como un hecho y una necesidad derivados, de forma natural y automática, del transporte de fondos, determinante de la concentración de éstos en las dependencias de las Empresas de Seguridad, lo que exige su previsión normativa y su regulación.

Por su parte, el transporte aéreo de fondos, aunque no está excluido expresamente de la legislación vigente, carece prácticamente de regulación específica en la actualidad y se considera necesaria su previsión, principalmente cuando están implicados en las necesidades de fondos territorios insulares o zonas de difícil acceso por razones geográficas.

2. La prestación sin armas del servicio propio de los Vigilantes de Seguridad constituye una modalidad que ha nacido a la vida al calor de los Convenios Laborales del sector, a través de la figura del denominado «Guarda de Seguridad», revelándose al propio tiempo que en

la mayoría de los casos resultaba innecesaria y desproporcionada la realización de tales actividades con armas, de donde sólo se autorizará el uso de las mismas cuando lo exijan las concretas circunstancias.

3. La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una realidad que no cabe desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los casos, por Vigilantes al servicio de algunas Empresas de Seguridad inscritas y, en otros casos, por el personal propio de las Entidades a las que pertenece el protegido.

La atribución a las Empresas de Seguridad de la posibilidad de realizar servicios de protección personal supondría la normalización y adecuación de este tipo de actividades a una normativa concreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante una situación real pero no prevista jurídicamente, debiéndose establecer fuertes mecanismos de control por parte de la Administración, como respecto de los servicios en sí mismos y del personal encargado de prestarlos.

4. El ámbito predominantemente rural en que desenvuelven sus funciones los Guardas Particulares del Campo hace que, si bien no tienen sentido ni la especificidad de determinadas normas ni lo anacrónico de algunos aspectos de su regulación, deben mantenerse ciertas notas características de su régimen jurídico que requieren especialidades respecto del establecido para los Vigilantes de Seguridad.

En consecuencia, la regulación de los Guardas Particulares del campo, que ha sobrevivido casi ciento cincuenta años y que contiene elementos que responden a necesidades históricas y geográficas concretas, debe ser adaptada a las exigencias actuales en el ámbito de la Ley de Seguridad Privada, teniendo en cuenta su identidad sustancial.

5. Respecto a la profesión de Detective Privado, de ya larga tradición en España y en general en los países occidentales, se detectan múltiples problemas, entre los cuales los más importantes son los de insuficiencia de la normativa vigente, de determinación de controles o intervenciones de la Administración y de sistemática legislativa, que plantea la alternativa de su incorporación a las disposiciones sobre seguridad privada o de mantenimiento de la autonomía del bloque normativo.

La insuficiencia de rango normativo resulta evidente, si se tiene en cuenta que una Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y condiciones de ejercicio de la profesión; el sistema de intervención o control de la Administración del Estado en la organización, puesta en marcha y funcionamiento de las Agencias Privadas de Investigación; e inclusive el régimen sancionador aplicables a los titulares de las Agencias y al personal vinculado a las mismas, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden en la Sentencia 61/1990, de 29 de marzo.

La posible incorporación de la regulación de los Detectives a una Ley de Seguridad Privada ha sido objeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado,

su especificidad es evidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros, también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero, sobre todo, no hay nada que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley de Seguridad Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en este sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es parcialmente común con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y aconseja que sean asimismo idénticos los mecanismos de coordinación subordinada y de intervención de los servicios policiales.

6. Por último es, desde luego, urgente y necesaria la dotación del rango normativo suficiente al desarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia, que, en la legislación actualmente vigente y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales, apenas tiene apoyo en normas con rango de Ley y se encuentra contenido, prácticamente en su totalidad, en Reales Decretos y en Ordenes Ministeriales. Precisamente porque el régimen sancionador se considera la clave de arco para garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad privada, resulta imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango adecuado, en la que se tipifiquen todas las infracciones posibles, se determinen las sanciones a imponer y se diseñe el procedimiento sancionador, con especificación de las autoridades competentes para aplicar las distintas sanciones. Para que la Administración realice un control eficaz de cuantas actividades sean reguladas, resulta fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la parte sancionadora al objeto de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y bienes.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, el Consejo de Ministros acuerda remitir a las Cortes Generales el siguiente

## PROYECTO DE LEY

### CAPITULO I

#### Disposiciones Generales

##### Artículo 1

1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación por particulares de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad pública.

2. A los efectos de la presente Ley, pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las Empresas de Seguridad y el personal de seguridad privada, que estará integrado por los Vigilantes de Seguridad, los Jefes de Seguridad y los

Escotas Privados que trabajen en aquéllas, los Guardas Particulares del Campo y los Detectives Privados.

3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con respecto al ejercicio de los derechos fundamentales y a las libertades públicas y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley. El personal de seguridad privada deberá, asimismo, acomodarse en sus actividades y servicios en los principios básicos de actuación que se establecen en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

4. Las Empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones, en relación con los bienes, establecimientos o vehículos de cuya vigilancia o custodia estuvieren encargados.

#### Artículo 2

1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los Gobernadores Civiles.

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades, servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada, vigilancia e investigación.

3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que reglamentariamente se determinen.

4. Asimismo, las Empresas de Seguridad y los Detectives Privados presentarán periódicamente un informe sobre sus actividades, en la forma que reglamentariamente se determine, al Ministro del Interior, quien dará cuenta a las Cortes Generales del funcionamiento del sector.

#### Artículo 3

1. Las Empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, ejerciendo las funciones que les son propias, en el desarrollo de conflictos políticos, ni de conflictos laborales que afecten a otros trabajadores, sin perjuicio de mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.

2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas, sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener bancos de datos con tal objeto.

3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cual-

quier información sobre sus clientes o sobre el personal que tengan relación con los mismos.

#### Artículo 4

1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros.

2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos medios materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen las condiciones o circunstancias que determinaron su aprobación.

## CAPITULO II

### Empresas de Seguridad

#### Artículo 5

1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que la desarrollen, las Empresas de Seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los siguientes servicios y actividades:

a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones.

b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.

c) Depósito, custodia y manipulación de dinero, títulos-valores y demás objetos que, por su valor, económico y expectativas que generen o por su peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades propias de las entidades financieras.

d) Transporte a través de los distintos medios, incluido el aéreo, y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior, realizándolo, en su caso, mediante vehículos cuyas características serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

e) Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad.

f) Explotación de Centrales de Alarma y su conexión con las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

g) Planificación y asesoramiento sobre sistemas e instalaciones de seguridad.

2. Asimismo, las Empresas de Seguridad podrán crear Centros de formación y actualización del personal de seguridad privada, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

3. En ningún caso las Empresas de Seguridad po-

drán realizar las funciones de información e investigación propias de los Detectives Privados.

#### Artículo 6

1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.

2. No obstante, la prestación del servicio de escoltas personales sólo podrá realizarse previa autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurren especiales circunstancias y condicionada a la forma de prestación del servicio.

3. El Ministro del Interior podrá prohibir la prestación de los servicios de seguridad o la utilización de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.

#### Artículo 7

1. Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las Empresas de Seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante la inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Constituirse como Sociedades Anónimas o como Sociedades de Responsabilidad Limitada, teniendo como objeto social exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente Ley.

b) En todo caso, las Empresas de Seguridad que presten servicios con personal de seguridad deberán tener la nacionalidad española.

c) Poseer un capital social en la cuantía mínima que se determine, en razón de su objeto y de su ámbito geográfico de actuación, que no podrá ser inferior al establecido en la legislación sobre Sociedades Anónimas.

d) El capital social habrá de estar totalmente desembolsado e integrado por títulos nominativos.

e) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos que se determinen en razón del objeto social y del ámbito geográfico de actuación. En particular, cuando las Empresas de Seguridad prestaren servicios para los que se precise el uso de armas, habrán de adoptar las medidas que garanticen su adecuada custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine.

f) Prestar las garantías que se establezcan por vía reglamentaria, en razón de las circunstancias expresadas en el apartado anterior.

2. No obstante, a las Empresas de Seguridad que tengan por objeto exclusivo la instalación o manteni-

miento de aparatos y sistemas de seguridad se les podrá eximir reglamentariamente del cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.

3. La ausencia sobrevenida de los requisitos indicados producirá la cancelación de la inscripción, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.

#### Artículo 8

Los Administradores y Directores de las Empresas de Seguridad, que figurarán en el registro a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:

- a) Ser personas físicas residentes en España.
- b) Carecer de antecedentes penales.
- c) No haber sido sancionados en el año o en los dos años anteriores, respectivamente, por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.
- d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años anteriores.

#### Artículo 9

1. Las Empresas de Seguridad estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones, dentro de los quince días siguientes al mismo.

2. Asimismo deberán comunicar cualquier modificación de sus estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de sus órganos de administración y dirección, en el plazo de quince días.

### CAPITULO III

#### Personal de Seguridad

#### SECCION PRIMERA

#### Disposiciones Comunes

#### Artículo 10

1. Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a instancia de los propios interesados.

2. Para la habilitación del personal de seguridad privada, los aspirantes habrán de ser mayores de edad, no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine reglamentariamente y superar las pruebas oportunas

que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de sus funciones.

3. La obtención de la habilitación y, en todo momento, la prestación de los servicios, requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española y la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones.

b) Reunir los requisitos enunciados en los apartados b), c) y d) del artículo 8 de la presente Ley.

c) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años posteriores a la condena.

4. La ausencia sobrevenida de los requisitos indicados producirá la cancelación de la habilitación, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada dictada con audiencia del interesado.

5. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son propias.

## SECCION SEGUNDA

### Vigilantes de Seguridad

#### Artículo 11

1. Los Vigilantes de Seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:

a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados.

c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones, en relación con los bienes objeto de protección.

d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con los bienes objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos.

e) Efectuar la protección del almacenamiento, manipulación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente se determinen, será preciso haber obtenido una habilitación especial.

#### Artículo 12

1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los Vigilantes integrados en Empresas de Seguridad, portando el uniforme y distintivo del cargo que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los Vigilantes, dentro de la Entidad o Empresa donde presten sus servicios, se dedicarán exclusivamente a la función de seguridad, propia de su cargo, no pudiendo simultanear la misma con otras misiones.

#### Artículo 13

Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los Vigilantes de Seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo tal condición, sean de uso común. No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas, en los que la entrada y circulación sean susceptibles de restricción y control, podrá autorizarse la vigilancia y protección en las indicadas vías de uso público o de uso común.

#### Artículo 14

1. Los Vigilantes de Seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes licencias, sólo desarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo 11, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, entre los que se comprenderán, además del de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de análoga significación.

2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se determinará reglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio.

#### Artículo 15

Los Vigilantes que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que respecto de las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación vigente.

**SECCION TERCERA****Jefes de Seguridad****Artículo 16**

Cuando el número de Vigilantes de Seguridad, la complejidad organizativa o técnica u otras circunstancias lo hagan necesario, las funciones de aquéllos se desempeñarán a las órdenes de un Jefe de Seguridad, que será responsable del funcionamiento de los Vigilantes y de los sistemas de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la observancia de la normativa aplicable.

**SECCION CUARTA****Escoltas Privados****Artículo 17**

1. Son funciones de los Escoltas Privados, con carácter exclusivo y excluyente, el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la condición de Autoridades Públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones, serán aplicables a los Escoltas Privados los preceptos de la Sección Segunda de este Capítulo, y las demás normas concordantes de la presente Ley, relativas a Vigilantes de Seguridad, salvo la referente a la uniformidad.

3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto sobre tenencia de armas en el artículo 14 de esta Ley.

**SECCION QUINTA****Guardas Particulares del Campo****Artículo 18**

Los Guardas Particulares del Campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección de la propiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los Vigilantes de Seguridad, con las especialidades siguientes:

a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.

b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en Empresas de Seguridad.

c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación corresponderá efectuarlas a las Unidades competentes de la Guardia Civil.

d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación de cada clase de servicio.

**SECCION SEXTA****Detectives Privados****Artículo 19**

1. Los Detectives Privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:

a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.

b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal.

c) De la vigilancia en Ferias, Hoteles, Exposiciones o en cualquier otro ámbito de gran concurrencia.

2. Salvo lo dispuesto en la letra c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios propios de las Empresas de Seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que se refieren las Secciones anteriores del presente Capítulo.

3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio, debiendo denunciar inmediatamente ante la Autoridad competente cualquier hecho de esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.

4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.

**Artículo 20**

Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación necesaria para el ejercicio de las funciones de Detective privado los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad integrados en las unidades de Información o de Policía Judicial en el momento de la solicitud o durante los dos años anteriores a la misma.

**CAPITULO IV****Régimen Sancionador****SECCION PRIMERA****Infracciones****Artículo 21**

1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley, podrán ser leves, graves y muy graves.

2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año; y las muy graves a los dos años.

El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la infracción se consume.

La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado; del procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquéllos contra quienes se dirija.

## Artículo 22

Las Empresas de Seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:

### I. Infracciones muy graves:

- a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación necesaria.
- b) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
- c) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los Libros-Registros reglamentarios.
- d) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas, así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta Ley.
- e) La realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo dispuesto en la presente Ley.
- f) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
- g) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

### II. Infracciones graves:

- a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la homologación sea preceptiva.
- b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las características reglamentarias.
- c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la Empresa de Seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial correspondiente.
- d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al Ministerio del Interior la celebración de los correspondientes contratos.
- e) La utilización en el ejercicio de funciones de

seguridad, de personas que carezcan de cualesquiera de los requisitos necesarios.

f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los Vigilantes de Seguridad dentro de la jornada laboral establecida.

g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la forma y plazo prevenidos.

h) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones o información a terceros sobre los clientes o su personal.

i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

### III. Infracciones leves:

a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que reglamentariamente sean exigibles.

b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

## Artículo 23

El personal de seguridad privada podrá incurrir en las siguientes infracciones:

### I. Infracciones muy graves:

- a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no integrado en Empresas de Seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
- b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de armas fuera del servicio y sobre su utilización.
- c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los Detectives Privados, o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
- d) La comisión de un delito doloso en el ejercicio de sus funciones.
- e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
- f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.

### II. Infracciones graves:

- a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida.

b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.

c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral.

d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.

e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre conflictos políticos o laborales, control de opiniones o información a terceros sobre los clientes o su personal.

f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de la presente Ley.

g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del Informe de actividades de los Detectives Privados en la forma y plazo prevenidos.

h) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.

### III. Infracciones leves:

a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean exigibles, por parte del personal no integrado en Empresas de Seguridad.

b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.

c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no constituya infracción grave o muy grave.

### Artículo 24

1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de «alarmas» u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo, se reputará infracción muy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.

2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que los regulen, o su funcionamiento con daños o molestias para terceros será considerada infracción leve.

### Artículo 25

Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley podrán determinar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves en que se concreten los tipos que se contienen en los artículos anteriores.

## SECCION SEGUNDA

### Sanciones

#### Artículo 26

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

#### I. Por la comisión de infracciones muy graves:

- a) Multas de 5.000.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
- b) Cancelación de la inscripción.

#### II. Por la comisión de infracciones graves:

- a) Multas de 50.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
- b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.

#### III. Por la comisión de infracciones leves:

- a) Apercibimiento.
- b) Multas de hasta 50.000 mil pesetas.

#### Artículo 27

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

#### I. Por la comisión de infracciones muy graves:

- a) Multas de 500.001 hasta 1.000.000 de pesetas.
- b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.

#### II. Por la comisión de infracciones graves:

- a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
- b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior a un año.

#### III. Por la comisión de infracciones leves:

- a) Apercibimiento.
- b) Multas de hasta 50.000 pesetas.

#### Artículo 28

Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley podrán imponer, por

la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 24, y de acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las siguientes sanciones:

- a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
- b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
- c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.

#### Artículo 29

El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de seguridad privada será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden en que se haya podido incurrir.

#### Artículo 30

1. La potestad sancionadora prevista en la presente Ley corresponderá:

- a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción y retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
- b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por infracciones muy graves.
- c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones graves, excepto las cometidas por los Guardas Particulares del Campo, cuya imposición corresponderá al Director General de la Guardia Civil.
- d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.

2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

#### Artículo 31

1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas individualizadamente en los Reglamentos, las Autoridades competentes tendrán en cuenta la gravedad y trascendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés público, la situación de riesgo creada o mantenida, para personas o bienes, la reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la Empresa de Seguridad contra quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.

2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado ganancias para los auto-

res de las mismas, las multas podrán incrementarse en cuantías equivalentes al duplo de dichas ganancias.

#### Artículo 32

1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves, graves o muy graves prescribirán respectivamente a los dos meses, al año o a los dos años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si hubiese comenzado; y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la ejecución o cumplimiento.

### SECCION TERCERA

#### Procedimiento

#### Artículo 33

No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino en virtud de procedimiento instruido por las Unidades orgánicas correspondientes, conforme a las normas contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La sanción de apercibimiento podrá imponerse en procedimiento abreviado, con audiencia del interesado.

#### Artículo 34

Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por Empresas o personal de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar aquéllas ante el Ministerio del Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible ejercicio de las competencias sancionadoras que les atribuye la presente Ley.

#### Artículo 35

1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las medidas cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del procedimiento, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma en los demás supuestos.

2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:

- a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, ma-

terial o equipo prohibido, no homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y efectos de la infracción.

b) La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias.

c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y, en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquella, mientras dura la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de seguridad.

También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto finalice el proceso por delitos contra dicho personal.

3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas o bienes, las medidas previstas en el apartado a) del número anterior, podrán ser adoptadas inmediatamente por los Agentes de la Autoridad; si bien, para su mantenimiento, habrán de ser ratificadas por la Autoridad competente, en el plazo máximo de setenta y dos horas.

4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaran la medida cautelar de retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa de la habilitación o de la tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán elevar los particulares pertinentes a la Autoridad competente, para su ratificación, debiendo éste resolver en el plazo de siete días.

5. Las medidas cautelares previstas en el apartado 1.b) y c) del presente artículo no podrán tener una duración superior a un año cuando se adoptara en un procedimiento sancionador por infracción grave.

## CAPITULO V

### Ejecución

#### Artículo 36

1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.

2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para satisfacerla, la Autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.

3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de documentación y clausura o cierre de establecimientos o empresas, la Autoridad sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a quince días ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que pudieran resultar directamente afectados.

#### Artículo 37

1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en el Capítulo V del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.

2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado en la resolución, una vez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el Reglamento General de Recaudación.

#### Artículo 38

La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves podrá ser hecha pública, en virtud de acuerdo de las Autoridades competentes, en los términos que reglamentariamente se determinen.

#### Artículo 39

Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo 30, podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse sucesivamente en el 50% de la cantidad anterior en casos de reiteración del incumplimiento.

## DISPOSICIONES ADICIONALES

### Primera

1. Las Empresas de Seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración de sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.

2. La autorización de inversiones de capital extranjero en Empresas de Seguridad exigirá en todo caso informe previo del Ministerio del Interior.

3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las personas físicas nacionales de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea ni a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad.

### Segunda

1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización y adiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por profesores acreditados y en Centros de Formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los

espacios para el aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y sistemas de seguridad.

2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que puedan ser exigibles para entrar en funcionamiento, los Centros de Formación requerirán autorización de apertura del Ministerio del Interior, que podrá realizar actividades inspectoras de la organización y funcionamiento de los Centros.

3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración de Centros de Formación del personal de seguridad privada, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios en materia de seguridad, vigilancia o investigación privadas, en los dos años anteriores.

### Tercera

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado por los titulares de los mismos. Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de seguridad privada.

## DISPOSICIONES TRANSITORIAS

### Primera

Las Empresas de Seguridad inscritas y las Agencias de Investigación autorizadas, las medidas de seguridad adoptadas y el material o equipo en uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de acuerdo con la normativa anterior, pero no cumplan, total o parcialmente, los requisitos o exigencias establecidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen, deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de un plazo de un año, que se contará:

a) Respecto a los requisitos nuevos de las Empresas o Agencias que requieran concreción reglamentaria, desde la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones de desarrollo.

b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las reglamenten.

c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se comuniquen las correspondientes resoluciones de homologación, cuando sean necesarias.

d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la promulgación de la presente Ley.

### Segunda

Los Vigilantes Jurados de Seguridad, los Guardas Jurados de Explosivos, los Guardas Particulares Jurados del Campo, y los Detectives Privados que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, reúnan las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes servicios con arreglo a la normativa anterior, podrán seguir desempeñando las funciones para las que estuvieren documentados, sin necesidad de obtener la habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.

### Tercera

Una vez transcurrido el plazo de un año a partir de la promulgación de la presente Ley, el personal que, bajo las denominaciones de Guardas de Seguridad, Controladores u otras de análoga significación, hubiera venido desempeñando con anterioridad a dicha promulgación funciones de vigilancia y controles en el interior de inmuebles no podrá realizar ninguna de las funciones enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente la habilitación regulada en el artículo 10 de la presente Ley.

## DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

## DISPOSICIONES FINALES

### Primera

El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:

a) Los requisitos y características que han de reunir las Empresas y Entidades objeto de regulación.

b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de actividades de seguridad privada.

c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a tal fin.

d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada.

e) El régimen de habilitación de dicho personal.

f) Los Organos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el desempeño de las distintas funciones.

### Segunda

Se faculta asimismo al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumo.